

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto-Presidencial n.º 3/2008

de 14 de Abril

Usando da competência conferida pela alínea *d*) do n.º 2 do artigo 134.º da Constituição, o Presidente da República decreta o seguinte:

Artigo 1.º

São exonerados, a seu pedido, sob proposta do Primeiro-Ministro, dos cargos abaixo indicados, os seguintes cidadãos:

- Dr. Américo Sabino Soares Nascimento, de Secretário de Estado da Juventude e Desportos; e
- Dra. Leonesa Lima Fortes, de Secretária de Estado Adjunta da Ministra das Finanças e Administração Pública.

Artigo 2.º

O presente Decreto-Presidencial entra imediatamente em vigor.

Publique-se.

Palácio da Presidência da República, na Praia, aos 4 de Abril de 2008. – O Presidente da República, PEDRO VERONA RODRIGUES PIRES

Referendado aos 4 de Abril de 2008.

O Primeiro-Ministro, *José Maria Pereira Neves*

—o\$—

ASSEMBLEIA NACIONAL

Resolução n.º 67/VII/2008

de 14 de Abril

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea *n*) do artigo 174.º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo Único

São eleitos os Cidadãos Fátima José Sapinho Gomes Monteiro, Ermitão Carvalhinho Fidalgo Spínola Barros e Daniel Lopes Pereira de Barros para, nos termos da alínea *c*) do n.º 3 do artigo 221.º da Constituição da República, integrarem o Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Aprovada em 25 Março de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

Resolução n.º 68/VII/2008

de 14 de Abril

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea *b*) do artigo 178.º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo 1.º

É aprovado, para ratificação, o Acordo sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, assinado em Madrid no dia 20 de Março de 2007, cujos textos autênticos em português e espanhol fazem parte integrante da presente Resolução.

Artigo 2.º

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e o Acordo referido no artigo anterior produz efeitos em conformidade com o que nele se estipula.

Aprovada em 25 de Março de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

**CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
ENTRE LA REPÚBLICA DE CABO VERDE
Y EL REINO DE ESPAÑA**

La República de Cabo Verde y el Reino de España, denominadas en lo sucesivo “las Partes”.

Deseando profundizar las relaciones jurídicas entre ambos Estados y facilitar su cooperación en el ámbito judicial, así como favorecer la reinserción social de las personas que hubieran sido objeto de condena en cualquiera de los dos países, han convenido concluir este Convenio sobre ejecución recíproca de resoluciones judiciales en materia penal, a tal efecto:

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Definiciones

A los efectos del presente Convenio, la expresión:

- a) “Estado de condena” designa el Estado donde se ha condenado a la persona que puede ser trasladada o que ya lo haya sido;
- b) “Estado de cumplimiento” designa al Estado al que el condenado puede ser trasladado o ya lo ha sido, con el fin de cumplir su condena;
- c) “Sentencia” designa una resolución judicial firme en la que se pronuncia una condena o medida de seguridad privativa de libertad;
- d) “Condenado” designa a la persona que está cumpliendo una pena o medida de seguridad privativa de libertad que le ha sido impuesta por sentencia firme en el Estado de condena.

Artículo 2

Principios generales

1. Las Partes se comprometen a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslado de personas condenadas en las condiciones previstas por el presente Convenio.

2. Las penas o medidas de seguridad impuestas en España a nacionales de Cabo Verde podrán ser cumplidas en Cabo Verde en establecimientos penales o bajo la supervisión de autoridades de Cabo Verde de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

3. Las penas o medidas de seguridad impuestas en Cabo Verde a nacionales de España podrán ser cumplidas en España en establecimientos penales o bajo la supervisión de autoridades españolas, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

4. El traslado podrá solicitarse bien por el Estado de condena bien por el Estado de cumplimiento.

Artículo 3

Condiciones del traslado

1. Un traslado podrá llevarse a cabo con arreglo al presente Convenio solamente en las condiciones siguientes:

- a) El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento;
- b) La sentencia deberá ser firme;
- c) La duración de la pena o medida de seguridad pendiente de cumplimiento por el condenado deberá ser al menos de 1 año, el día de la recepción de la petición.
- d) El condenado, o su representante legal, en caso de incapacidad del condenado, deberá consentir expresamente el traslado;
- e) Los hechos por los cuales la persona fue condenada deben constituir delito con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento, aunque no exista identidad en la tipificación;
- f) El Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo en el traslado.

2. En casos excepcionales, las partes podrán convenir en un traslado, aunque la duración de la condena que reste por cumplir sea inferior a la prevista en el apartado 1, c).

3. Las partes podrán acordar la aplicación de las disposiciones del presente Convenio a las penas y medidas de seguridad impuestas contra menores de edad, de conformidad con su legislación respectiva. En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento de la persona que se encuentre legalmente facultada para actuar en nombre del menor.

Artículo 4

Deber de facilitar información

1. El Estado de condena informará al condenado que pueda beneficiarse del presente Convenio de la existencia y contenido del mismo.

2. Si el condenado expresa al Estado de condena su deseo de ser trasladado en virtud del presente Convenio, dicho Estado deberá cursar la solicitud al Estado de cumplimiento a la mayor brevedad posible, comunicando la información contenida en el apartado 4.

3. Si el condenado expresa al Estado de cumplimiento su deseo de ser trasladado en virtud del presente Convenio, el Estado de condena deberá proporcionar al Estado de cumplimiento, a petición de éste la información siguiente:

4. Las informaciones comprenderán:

- a) El nombre, la fecha y el lugar exacto de nacimiento del condenado, así como el nombre de sus padres;
- b) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena;
- c) La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo y de terminación de la pena o medida de seguridad.

5. Deberá informarse por escrito al condenado del curso dado a su solicitud en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a una petición de traslado.

Artículo 5

Autoridades centrales

1. Cada Parte designará una autoridad central encargada de enviar y recibir directamente las solicitudes de traslado con arreglo al presente Convenio.

2. La autoridad central de España será el Ministerio de Justicia. La autoridad central de Cabo Verde será el Ministerio de Justicia. Las Partes podrán modificar la designación de su autoridad central, comunicándolo por vía diplomática a la otra parte.

3. A los efectos del presente Convenio, las autoridades centrales se comunicarán directamente entre sí, procurando hacer uso de las nuevas tecnologías, con miras a la resolución de las cuestiones que se susciten durante la tramitación de los procedimientos de traslado.

4. No obstante lo anterior, las Partes podrán recurrir a la vía diplomática para el envío o recepción de solicitudes de traslado o de información relativa a los mismos, cuando lo consideren necesario por las especiales circunstancias que concurran en el caso.

Artículo 6

Peticiones y respuestas

1. La petición de traslado, dirigida a las autoridades centrales designadas en el presente convenio, se formulará por escrito o bien por cualquier medio que deje constancia escrita en condiciones que permitan establecer su autenticidad.

2. La respuesta podrá ser comunicada por las mismas vías.

3. El Estado de cumplimiento comunicará al Estado de condena, a la mayor brevedad, su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.

Artículo 7

Documentación justificativa

1. El Estado de cumplimiento, a petición del Estado de condena, facilitará a este último:

- a) Un documento o una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado;
- b) Una copia de las disposiciones legales del Estado de cumplimiento de las cuales resulte que los hechos que hayan dado lugar a la condena son constitutivos de delito.

2. El Estado de condena deberá facilitar al Estado de cumplimiento los documentos que a continuación se expresan:

- a) Copia certificada de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;
- b) La indicación de la duración de la condena o medida de seguridad, el tiempo ya cumplido y el que quedare por cumplir o la fecha de cumplimiento definitivo;
- c) Un documento en el que conste el consentimiento del condenado para el traslado;
- d) Cuando proceda, informe médico o social acerca del condenado, información sobre su tratamiento en el Estado de condena y recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado de cumplimiento.

Artículo 8

Consentimiento y verificación

1. El Estado de condena se asegurará de que el condenado que preste su consentimiento en los términos del artículo 3.1.d) lo haga libre y voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias jurídicas que de ello se deriven.

2. El procedimiento que se siga a este respecto se regirá por la ley del Estado de condena.

Artículo 9

Ejecución de la pena

1. El condenado continuará cumpliendo en el Estado de cumplimiento la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado de condena, de acuerdo con la ley del Estado de cumplimiento.

2. En ningún caso puede modificarse, por su naturaleza o por su duración, la pena o medida de seguridad privativa de libertad pronunciada por el Estado de condena.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, en aquellos casos en que la condena que reste por cumplir sea, por su duración, incompatible con el límite máximo previsto en la legislación del Estado de cumplimiento, se considerará convertida al límite máximo prescrito por esta legislación. A tal efecto, el Estado de cumplimiento no estará obligado a respetar los límites máximos previstos en su legislación para el mismo delito.

4. El Estado de condena conservará plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales, y para la resolución de cualquier recurso extraordinario interpuesto contra las mismas.

Artículo 10

Non bis in idem

El condenado trasladado para la ejecución de una condena conforme al presente Convenio no podrá ser detenido, procesado ni condenado en el Estado de cumplimiento por los mismos hechos que motivaron la pena impuesta.

Artículo 11

Indulto, amnistía, conmutación

1. El Estado de condena o el Estado de cumplimiento, con consentimiento del primero, podrá conceder la amnistía, el indulto, la conmutación de la pena o medida de seguridad o adoptar cualquier decisión o medida legal que entrañe una reducción de la pena o medida de seguridad.

2. Las solicitudes del Estado de cumplimiento a que se refiere el apartado anterior, deberán ser motivadas.

Artículo 12

Cesación del cumplimiento

El Estado de cumplimiento deberá poner fin al cumplimiento de la condena en cuanto haya sido informado por el Estado de condena de cualquier decisión o medida que tenga como efecto quitar a la condena su carácter ejecutorio.

Artículo 13

Cargas económicas

1. La entrega del penado por las autoridades del Estado de condena a las autoridades del Estado de cumplimiento se efectuará en el lugar en que convengan las Partes en cada caso.

2. El Estado de cumplimiento se hará cargo de los gastos del traslado.

Artículo 14

Lenguas

1. Las informaciones previstas en el artículo 7, serán transmitidas en la lengua de la Parte a la cual se dirijan.

2. Las comunicaciones entre las autoridades centrales a que se refiere el artículo 5, se realizarán en las lenguas respectivas.

Artículo 15

Régimen de libertad condicional

1. El condenado bajo el régimen de libertad condicional podrá ser trasladado para cumplir dicha condena bajo la vigilancia de las autoridades del Estado de cumplimiento.

2. El Estado de cumplimiento adoptará las medidas de vigilancia solicitadas y mantendrá informado al Estado

de condena sobre la forma en que se llevan a cabo. En caso de incumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que éste haya asumido, se lo comunicará de inmediato al Estado de condena.

Artículo 16

Resolución de controversias

Las partes procurarán resolver cualquier divergencia sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio a través de consultas entre las autoridades centrales. Si persistieran las divergencias se recurrirá a la vía diplomática.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última notificación por vía diplomática en la que se haga constar el cumplimiento de las formalidades constitucionales requeridas en cada uno de los Estados.

Artículo 18

Vigencia y terminación

1. El presente Convenio tendrá una duración indefinida.

2. Cada una de las Partes podrá denunciar el presente Convenio por escrito y por vía diplomática. La denuncia surtirá efectos transcurridos 6 meses desde la fecha de la notificación

3. El presente Convenio podrá aplicarse al cumplimiento de condenas a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, dictadas con anterioridad o en fecha posterior a la entrada en vigor del presente Convenio.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.

Hecho en Madrid, el día 20 de marzo de 2007, en dos originales, en idiomas portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República de Cabo Verde, *José Manuel Gomes Andrade*, Ministro de Justicia.

Por el Reino de España “A.R.”, *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro de Justicia.

**ACORDO SOBRE TRANFERÊNCIA DE PESSOAS
CONDENADAS ENTRE A
REPÚBLICA DE CABO VERDE E O REINO DE ESPANHA**

A República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, adiante denominados “Partes”.

Desejando aprofundar as relações jurídicas entre ambos Estados e facilitar a cooperação no âmbito judicial, assim como favorecer a reinserção social das pessoas que foram objecto de condenação em qualquer dos dois países, concordaram concluir este Acordo sobre execução recíproca de decises judiciais em matéria penal,

Concordaram o seguinte:

Artigo 1º

Definições

Para os efeitos do presente Acordo, a expressão:

- a) “Estado de condenação” designa o Estado onde foi condenada a pessoa que pode ser transferida ou que já o foi;
- b) “Estado de cumprimento” designa o Estado para o qual o condenado pode ser ou já foi transferido, com o propósito de cumprir uma condenação;
- c) “Sentença” designa uma decisão judicial transitada em julgado que tenha aplicado uma pena ou medida de segurança privativa de liberdade;
- d) “Condenado” designa a pessoa que esteja a cumprir uma pena ou medida de segurança privativa de liberdade aplicada por uma sentença transitada em julgado no Estado onde foi condenado.

Artigo 2º

Princípios gerais

1. As Partes comprometem-se a prestar mutuamente a mais alargada colaboração possível em matéria de transferência de pessoas condenadas nas condições previstas no presente Acordo.

2. As penas ou medidas de segurança impostas em Espanha a nacionais de Cabo Verde podem, ser cumpridas nos estabelecimentos prisionais deste país ou sob a supervisão das autoridades cabo-verdianas, em conformidade com as disposições do presente Acordo.

3. As penas ou medidas de segurança impostas em Cabo Verde a nacionais de Espanha podem ser cumpridas em estabelecimentos prisionais deste país ou sob a supervisão de autoridades espanholas, em conformidade com as disposições do presente Acordo.

4. A transferência pode ser solicitada tanto pelo Estado de condenação como pelo Estado de cumprimento.

Artigo 3º

Condições de transferência

1. Uma transferência pode ter lugar nos termos do presente Acordo unicamente nas seguintes condições:

- a) O condenado ser nacional do Estado de cumprimento;
- b) A sentença ter transitado em julgado;
- c) A duração da pena ou medida de segurança ainda por cumprir pelo condenado deve ser pelo menos de um ano, no dia da recepção do pedido;
- d) O condenado, ou o seu representante legal, em caso de incapacidade do condenado, deve consentir expressamente na transferência;
- e) Os factos pelos quais a pessoa foi condenada devem constituir crime de acordo com a lei do Estado de cumprimento ainda que não exista identidade na tipificação;
- f) O Estado de condenação e o Estado de cumprimento devem estar de acordo quanto à transferência.

2. Em casos excepcionais, as partes podem acordar numa transferência, mesmo que a pena por cumprir seja inferior à prevista na alínea c) do nº 1.

3. As partes podem acordar a aplicação das disposições do presente Acordo às penas e medidas de segurança impostas a menores de idade, nos termos da respectiva legislação nacional. Em qualquer caso, é obrigatório o consentimento expresso do representante legal do menor.

Artigo 4º

Dever de informação

1. O Estado de condenação deve informar o condenado que possa beneficiar do presente Acordo da sua existência e conteúdo.

2. Se o condenado expressar ao Estado de condenação o desejo de ser transferido ao abrigo do presente Acordo, este deve transmitir a solicitação ao Estado de cumprimento com a maior brevidade possível juntamente com as informações referidas no número 4.

3. Se o condenado expressar ao Estado de cumprimento o seu desejo de ser transferido ao abrigo do presente Acordo, o Estado de condenação deve fornecer a pedido do estado de cumprimento, as informações referidas no número seguinte.

4. As informações devem incluir:

- a) O nome, a data e o lugar exacto de nascimento do condenado, assim como o nome dos seus pais;
- b) Uma exposição dos factos que deram origem à condenação;
- c) A natureza, a duração e a data de início e de término da pena ou medida de segurança.

5. O condenado deve ser informado, por escrito, do tratamento dado ao pedido feito nos termos dos números anteriores bem como de quaisquer decisões tomadas por qualquer um dos Estados relativamente ao mesmo.

Artigo 5º

Autoridades Centrais

1. Cada Parte designa uma Autoridade Central encarregada de enviar e receber directamente os pedidos de transferência, conforme estabelecido no presente Acordo.

2. Por parte de Espanha a Autoridade Central é o Ministério de Justiça. Por parte de Cabo Verde a Autoridade Central é o Ministério da Justiça. Qualquer das Partes pode modificar a designação da Autoridade Central através de comunicação por via diplomática à outra Parte.

3. Para efeitos do presente Acordo, as Autoridades Centrais devem comunicar directamente entre si, procurando fazer uso das novas tecnologias, com vista à resolução das questões que surgirem durante a tramitação dos pedidos de transferência.

4. As Partes, sem prejuízo do disposto no número anterior, podem recorrer à via diplomática para o envio ou recepção de pedidos de transferência ou de informação relativa mesma, quando o considerarem necessário pelas especiais circunstâncias que concorrem no caso.

Artigo 6º

Petições e respostas

1. O pedido de transferência, dirigido às autoridades centrais designadas no presente Acordo, deve ser formulado por escrito ou por quaisquer meios susceptíveis de dar origem a um registo escrito em condições que permitam ao Estado receptor determinar a sua autenticidade.

2. A resposta pode ser comunicada pelas mesmas vias.

3. O Estado de cumprimento deve comunicar ao Estado de condenação, com a máxima brevidade possível a sua decisão de aceitar ou recusar a transferência solicitada.

Artigo 7º

Documentação justificativa

1. O Estado de cumprimento, a pedido do Estado de condenação, deve facultar a este último:

- a) Documento ou declaração que indique que o condenado é nacional do Estado de cumprimento;
- b) Cópia das disposições legais das quais resulte que os factos que deram lugar à condenação constituem crime no direito do Estado de cumprimento.

2. O Estado de condenação deve facultar ao Estado de cumprimento os seguintes documentos:

- a) Cópia certificada da sentença e das disposições legais aplicadas;
- b) A indicação da duração da pena ou medida de segurança, o tempo já cumprido e o tempo que falta cumprir ou a data de cumprimento definitivo;
- c) Documento do qual conste o consentimento do condenado para a transferência;
- d) Quando aplicável, informação médica ou social acerca do condenado, informação sobre tratamento em curso no Estado de condenação e recomendação para a continuação do tratamento no Estado de cumprimento.

Artigo 8º

Consentimento e verificação

1. O Estado de condenação deve assegurar-se de que o condenado presta o consentimento nos termos da alínea d) do número 1 do artigo 3º de forma livre, voluntária e com plena consciência das consequências jurídicas daí decorrentes.

2. O processo para a prestação de tal consentimento rege-se pela lei do Estado de condenação.

Artigo 9º

Execução da pena

1. O condenado continua a cumprir a pena ou medida de segurança nos termos da lei do Estado de cumprimento.

2. A pena ou medida de segurança privativa de liberdade imposta pelo Estado de condenação não pode, em caso algum, ser modificada, quanto à sua natureza ou duração.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, nos casos em que a pena que falta cumprir seja pela sua duração incompatível com o limite máximo previsto pela lei do Estado de cumprimento considera-se essa parte convertida a esse limite máximo. Para este efeito, o Estado de cumprimento não está obrigado a respeitar os limites máximos previstos na sua lei para o mesmo crime.

4. O Estado de condenação conserva plena jurisdição para a revisão das sentenças aplicadas pelos seus tribunais, e para a decisão de qualquer recurso extraordinário interposto contra as mesmas.

Artigo 10º

“Non bis in idem”

A pessoa transferida para a execução de uma condenação nos termos do presente Acordo não pode ser detida, processada ou condenada no Estado de cumprimento pelos mesmos factos que deram origem a condenação.

Artigo 11º

Indulto, amnistia, comutação

1. O Estado de condenação ou o Estado de cumprimento, com consentimento do primeiro, podem conceder a amnistia, o indulto, a comutação da pena ou medida de segurança ou adoptar qualquer decisão ou medida legal que acarrete uma redução da pena ou medida de segurança.

2. O pedido de consentimento do Estado de cumprimento, a que se refere o número anterior, deve ser fundamentado.

Artigo 12º

Cessaçã do cumprimento

O Estado de cumprimento deve pôr fim à execução da condenação logo que seja informado pelo Estado da condenação de qualquer decisão ou medida que tenha como efeito retirar à condenação o seu carácter executório.

Artigo 13º

Despesas

1. A entrega do condenado pelas autoridades do Estado de condenação às autoridades do Estado de cumprimento deve ser efectuada no lugar convencionado pelas Partes em cada caso.

2. As despesas com a transferência são suportadas pelo Estado de cumprimento.

Artigo 14º

Línguas

1. As informações previstas no artigo 7º serão transmitidas na língua da Parte à qual são dirigidas.

2. As comunicações entre as autoridades centrais a que se refere o artigo 5º serão realizadas nas respectivas línguas.

Artigo 15º

Regime de Liberdade Condicional

1. O condenado em regime de liberdade condicional no Estado de condenação pode ser transferido para cumprir a condenação sob a vigilância das autoridades do Estado de cumprimento.

2. O Estado de cumprimento deve adoptar as medidas de vigilância solicitadas e manter o Estado de condenação informado sobre a sua execução. O incumprimento por parte do condenado das obrigações que tenha assumido deve ser imediatamente comunicado ao Estado de condenação.

Artigo 16º

Resolução de controvérsias

Qualquer controversia que surja entre as Partes, relacionada com a interpretação ou aplicação deste acordo, deve ser resolvida mediante consulta entre as Autoridades Centrais. Em caso de não se chegar a um acordo, deve recorrer-se à via diplomática.

Artigo 17º

Entrada em vigor

O presente Acordo entra em vigor no primeiro dia do segundo mês após a data da última notificação por via diplomática em que uma das partes informa a outra do cumprimento das formalidades constitucionais exigidas pela respectiva ordem jurídica interna.

Artigo 18º

Duração e termo do Acordos

1. O presente Acordo é celebrado por tempo indeterminado.

2. Cada uma das Partes pode denunciar o presente Acordo mediante notificação escrita, por via diplomática. A denúncia terá efeito 6 meses após da data da sua notificação.

Em fé do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados pelos respectivos Governos, assinaram o presente Acordo.

Feito em Madrid, no dia 20 Março de 2007, em dois exemplares, nas línguas portuguesa e espanhola, ambos os textos fazendo igualmente fé.

Pela República de Cabo Verde, *José Manuel Gomas Andrade*, Ministro da Justiça.

Pelo Reino de Espanha, *Mariano Fernández Bermejo*, Ministro da Justiça.

Resolução n.º 69/VII/2008

de 14 de Abril

A Assembleia Nacional vota, nos termos da alínea b) do artigo 178.º da Constituição, a seguinte Resolução:

Artigo 1.º

É aprovado, para ratificação, o Acordo sobre Extradicação entre a República de Cabo Verde e o Reino de Espanha, assinado em Madrid no dia 20 de Março de 2007, cujos textos autênticos em português e espanhol fazem parte integrante da presente Resolução.

Artigo 2.º

A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e o Acordo referido no artigo anterior produz efeitos em conformidade com o que nele se estipula.

Aprovada em 25 de Março de 2008.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Aristides Raimundo Lima*

CONVENIO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE CABO VERDE Y EL REINO DE ESPAÑA

La República de Cabo Verde, y el Reino de España, denominadas en lo sucesivo “las Partes”;

Deseando mantener y reforzar los lazos que unen a los dos países;

Deseando establecer una cooperación más eficaz entre los dos Estados en la persecución de los delitos y la ejecución de las condenas, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo;

Deseando mejorar los procedimientos de extradición entre los dos Estados, de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales, en orden a la entrega recíproca de los delincuentes;

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Obligación de extraditar

Las Partes se comprometen a entregarse mutuamente, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, y a solicitud de la otra Parte, a las personas que se encuentren en su territorio y que sean reclamadas por ésta para ser procesadas o para la ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad impuesta por sus Tribunales, por un delito que dé lugar a la extradición.

Artículo 2

Delitos que dan lugar a la extradición

1. Sólo se concederá la extradición por causa de delitos que se encuentren tipificados penalmente por la legislación de ambas Partes si se da alguna de las siguientes condiciones:

a) si la solicitud de extradición tiene por objeto el procesamiento de la persona, que el delito esté

castigado en la legislación de ambas Partes con pena de prisión de duración superior a un año;

b) si la solicitud de extradición tiene por objeto la ejecución de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, además del requisito señalado en el párrafo anterior, que el periodo de condena que quede por cumplir por la persona reclamada sea de al menos 6 meses en el momento de formular la solicitud.

2. A la hora de determinar si los hechos constituyen delito conforme a la legislación de ambas Partes, de acuerdo con el párrafo anterior, no tendrá relevancia el hecho de que las respectivas legislaciones no incluyan el acto dentro de la misma categoría de delitos, o que el delito no reciba la misma denominación.

3. Si la solicitud de extradición se refiere a dos o más hechos, cada uno de los cuales constituye delito conforme a la legislación de ambas Partes, y al menos uno de ellos cumple los requisitos de duración de la pena previstos en el apartado 1 de este artículo, la Parte requerida podrá conceder la extradición por todos ellos.

Artículo 3

Motivos de denegación obligatorios

La extradición será denegada si:

a) la Parte requerida considera que el delito por el que se solicita la extradición es un delito político. A tales efectos, no se considerarán delitos políticos los delitos de terrorismo ni cualesquiera otros delitos que la Parte requerida considere excluidos de dicha categoría en virtud de cualquier acuerdo internacional del que sea parte.

b) la Parte requerida posee fundados motivos para pensar que la solicitud de extradición fue presentada con la finalidad de perseguir o castigar a la persona reclamada en razón de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo o condición, o con la intención de someter a la persona a cualquier otra forma de discriminación, o que la situación de la persona en el procedimiento judicial pueda resultar perjudicada por cualquiera de esas razones;

c) el delito por el que se solicita la extradición constituye un delito exclusivamente militar;

d) la persona reclamada es un nacional de la Parte requerida, o le haya sido concedido por ésta asilo político, en el momento de la comisión de los hechos, en los términos admitidos por la Constitución y por la Ley de la Parte requerida;

e) la acción penal o la pena hayan prescrito conforme a la ley de la Parte requirente;

f) los tribunales de la Parte requerida ya han dictado sentencia firme o concluido un procedimiento